

EL GOBIERNO, EL EZLN Y LAS ORGANIZACIONES EN CHIAPAS

GUSTAVO CASTRO SOTO

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 15 DE OCTUBRE DE 1997

La vida política del país y de las organizaciones no está inactiva. A nivel federal se vivió una intensa jornada preelectoral de cara a las elecciones para renovar el Congreso de la Unión, elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal así como las elecciones en muchos estados de la República. La pérdida del control priísta sobre el Congreso y del mismo presidente Zedillo, así como de la capital del país y otros estados de la República ha puesto en crisis al partido oficial y al presidencialismo.

El abandono de las filas priístas tanto de políticos como incluso de militares para engrosar las de la oposición ha creado un clima desfavorable al partido oficial. Empresarios como sectores eclesiales han mantenido en los últimos meses una crítica dura a las políticas gubernamentales, y han puesto el dedo en otras llagas: la militarización, los derechos humanos, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, etc.

En la medida en que los diversos sectores del país van perdiendo confianza y credibilidad en el proyecto de Nación que impulsa el presidente Zedillo, éste se impone por la vía de la fuerza y de la coerción, ante la falta de consenso (credibilidad) y hegemonía (capaz de conducir con liderazgo). El presidente Zedillo tiene incluso al interior de sus filas priístas una corriente fuerte que lo cuestiona, los empresarios de igual modo al verse afectados por el cierre masivo de empresas y el despido de obreros que se suman a los millones de desempleados que se han generado en los últimos tres años.

Los militares entran ahora en acción. En la policía de la Ciudad de México, en diversas dependencias gubernamentales y hasta en el Congreso de la Unión, hacen presencia los militares para controlar la situación dentro de los espacios políticos y exigir cuotas de poder.

La pregunta de hoy queda en el aire: ¿quién controla al país?, ¿quién la dirige ahora o es capaz de dirigir un proyecto?, ¿el presidente Zedillo?, ¿los militares?, ¿el PRI?, ¿los empresarios?, ¿la oposición?, ¿el Congreso de la Unión?, ¿el diálogo de San Andrés?, ¿el EZLN?, ¿la sociedad civil y sus organizaciones?...

Desde septiembre de 1996 se suspendió el diálogo en San Andrés entre el EZLN y el Gobierno Federal y, desde entonces, podemos decir que el diálogo se encuentra en un impasse. Sin embargo, ni el Gobierno Federal, ni el EZLN ni las organizaciones de la sociedad civil han estado inactivas.

EL GOBIERNO

El gobierno federal como estatal están activos políticamente. El presidente Zedillo continúa su lucha por ganar la batalla política venciendo al EZLN por la vía de las acusaciones de “intolerancia”, de no festejar la fiesta “democrática” que se expresa en las urnas, por el derroche de recursos para supuestos proyectos de desarrollo regionales, acudiendo a Francia y otros lugares del mundo para vender su proyecto de Nación, aislando políticamente y de la opinión pública al EZLN para generar un consenso en el pueblo de México y a nivel internacional en contra del zapatismo.

En Chiapas esta situación se expresa por medio de los ataques constantes a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a la CONAI, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, etc. Ahora, por medio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con Cuauhtémoc López Sánchez a la cabeza, quien fuera duramente criticado por ser uno de los creadores de las leyes más represivas del estado y señalado como culpable de llevar a muchos indígenas presos en años anteriores, es ahora el artífice de una propuesta de ley para controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) de Derechos Humanos. Nuevamente, los intereses del estado se vierten en una Comisión controlada por el mismo. Sin embargo, la ofensiva gubernamental no termina aquí, el gobierno del estado con la bancada priísta del Congreso Local se niegan a modificar las leyes electorales que regirían la contienda política en 1988 de cara a la elección de los 111 presidentes municipales en la entidad.

Por otro lado, el gobierno del estado llevó a cabo de manera unilateral las consultas para la remunicipalización del estado como fruto de los Acuerdos de San Andrés, entre otras acciones; mientras que el presidente Zedillo visita a Chiapas, destina cuantiosos recursos a las zonas donde hay conflicto e inaugura el programa de Bienestar y Desarrollo parafraseando el título y contenido de la Mesa 3 de San Andrés aún pendiente de negociar, con el fin de quitarle la razón a las demandas zapatistas.

El gobierno federal como estatal también están activos militarmente. El aumento de militares en más municipios del estado, la presencia de más efectivos de la Policía de Seguridad Pública en las comunidades y el aumento del accionar de los llamados grupos paramilitares, hacen del panorama chiapaneco un mosaico de violencia que asoma en más municipios.

La postura gubernamental es clara: no a la propuesta de ley sobre los acuerdos firmados en la Mesa 1; el EZLN se debe incorporar al proceso electoral; el recurso de las armas está obsoleto y; las causas que originaron el conflicto se están solucionando.

EL EZLN

El EZLN está activo políticamente y de muchas formas: asistió a España al II Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo; otra delegación asistió a Italia, marcharon hacia la Ciudad de México; inauguraron el Congreso Nacional Indígena y la formación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN); impulsan, fomentan y fortalecen los procesos de las regiones autónomas y los municipios rebeldes independientemente de que los acuerdos sean cumplidos por el gobierno.

La negativa gubernamental a cumplir los acuerdos de la Mesa 1 (Derechos y Cultura Indígena) y orillar al EZLN a la lógica militar y con más presencia policiaca, nos da

para suponer que el EZLN, si bien no puede competir militarmente con el Ejército Mexicano, podría estarse preparando para una posible ofensiva, cuando el gobierno logre una correlación de fuerzas favorable a nivel político, social y de la opinión pública nacional e internacional.

El EZLN ha puesto clara su postura: mientras no se cumplan los acuerdos de la Mesa 1 y no se desmilitaricen las regiones indígenas, no habrá diálogo.

Hasta aquí, del Gobierno como del EZLN, podemos concluir:

- 1o.- Ambos están activos política y militarmente.
- 2o.- Ambos están llevando por la vía de los hechos y unilateralmente elementos de los Acuerdos de San Andrés.
- 3o.- Ambos ponen condiciones irreconciliables para la reanudación del Diálogo.
- 4o.- Ambos apuestan al proceso de desgaste mutuo: el gobierno por que el EZLN se acabe solo y, el EZLN por que el presidencialismo, el priísmo y la sociedad civil fortalecida abran cauces nuevos para transitar a la democracia, la libertad y la justicia.

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Durante el último año vimos morir y debilitarse en Chiapas a muchos actores sociales, campesinos e indígenas, que antes formaban un contrapeso social y político en la entidad. Coaliciones de organizaciones que canalizaban el descontento y servían de interlocución de las demandas sociales, campesinas e indígenas manteniendo así una alternativa política, civil, legal y pacífica.

Durante el último año vimos fortalecerse a los llamados grupos paramilitares como “Paz y Justicia” en el norte de Chiapas, renacer a los “Chinchulines”, mantener a la “Alianza San Bartolomé de los Llanos” y “Máscara Roja” y nacer al Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista. De igual modo hemos visto crecer la violencia en la Zona Norte, Altos, Valles Centrales y Fronteriza. La pregunta era: ¿dónde están las iniciativas civiles, sociales y pacíficas? ¿Por qué crecen los grupos armados y no la fuerza social?

El 12 de octubre surgieron dos acontecimientos esperanzadores: en la Ciudad de México se clausuró el Congreso Nacional Indígena (CNI) con nuevos aires. Una carta dirigida al presidente Zedillo exigiendo el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y la difusión amplia de dichos acuerdos han sido dos retos importantes a los que se han sumado muchos actores más. La lucha política continúa y el presidente Zedillo no ha convencido. La última palabra la sigue teniendo el cumplimiento de los firmado en San Andrés.

En Ocosingo, Chiapas, 6 coaliciones de organizaciones campesinas y urbanas formaron un nuevo frente social y político: **la Coordinadora de Organizaciones Autónomas del Estado de Chiapas (COAECH)**. Integrada por la 1) Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC); 2) Coalición de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO) que a su vez está integrada por la ARIC Independiente, ARIC Unión de Uniones, Coordinadora Nacional de los Pueblos Indios (CNPI), Organización Regional de Cafecultores de Ocosingo (COAO) y la organización Francisco Villa; 3) Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); 4)

Unidad del Movimiento de Organizaciones Independientes (UMOI) que a su vez aglutina a varias organizaciones más; 5) Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP) que también está formada por varias organizaciones con presencia en diversos municipios de la entidad y; 6) el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN). Aunque todas estas coaliciones tienen gran presencia en muchas partes del estado, no son todas y, al menos, CIOAC, CNPA y la FAC-MLN tienen vínculos con programas nacionales.

La COAECH, como nuevo actor social y político en Chiapas, definió su reglamento interno, programa y plan de acción que implica la movilización como una de las estrategias de lucha bajo un mismo proyecto político definido en 4 grandes líneas principales: 1) la exigencia de los Acuerdos de San Andrés, 2) la desmilitarización, 3) contra la paramilitarización, 4) reforma agraria.

Cabe mencionar que no se explicita la lucha electoral o la coalición para la participación política de cara a las elecciones municipales de 1998. Por otro lado, si hace años uno de los ejes aglutinadores de las fuerzas campesinas, indígenas y urbanas en la entidad fue la lucha por demandas de tipo económico, que provocó divisiones, cooptaciones por parte del gobierno y desacuerdos, ahora es el eje puramente político.

La conformación de una nueva fuerza social en el estado, abre caminos de esperanza para trazar estrategias comunes de las organizaciones con el fin de lograr los cambios que se anhelan en Chiapas.